



Michael Klare

Sangre y petróleo. Peligros y consecuencias de la dependencia del crudo

Tendencias, Barcelona, 2006 (2004),
400 págs.

La traducción del ensayo de Michael Klare -en 2006- ayudará al lector hispanohablante a entender las relaciones entre la diplomacia estadounidense y la geopolítica del petróleo. En cuatrocientas páginas, el autor vuelve sobre un tema que había abordado en *Guerras por los recursos: el futuro escenario para el conflicto global* (2003), pero con un análisis mucho más nítido de las implicaciones que trae para el mundo la dependencia de Estados Unidos hacia las importaciones de petróleo y gas natural. La edición en español está enriquecida con un epílogo que actualiza algunos datos hasta mediados de 2006.

La tesis central del libro es que, mientras el petróleo contribuye a fortalecer al primer consumidor mundial de energía, esta dependencia lo hace débil, pues Estados Unidos es vulnerable a las variaciones de abastecimiento en los mercados internacionales. Es lo que Klare llama “el dilema de la dependencia”. En efecto, para garantizar su abastecimiento en petróleo, este país debe hacer concesiones políticas con los dirigentes de regímenes antidemocráticos. A su vez, esta política externa conlleva un involucramiento creciente del

ejército en conflictos armados fuera del ámbito nacional. Finalmente, con la permanencia de estas tropas en países ricos en petróleo, crece la hostilidad de las poblaciones locales y las manifestaciones anti-estadounidenses.

En este sentido, el modelo de desarrollo actual es insostenible, tanto para Estados Unidos como para el resto del mundo. Esta constatación tiene serias implicaciones para los países de América Latina, aunque Klare se dedique más que todo al estudio de Oriente Medio, Rusia y Asia Central. La primera de ellas es que el acceso a la energía sea considerado como un asunto de seguridad nacional, lo cual según Klare “explica buena parte de la política exterior y militar de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial” (p. 34).

Como bien se sabe, un 70% de las reservas probadas de petróleo se concentran en seis países -Arabia Saudí, Iraq, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irán y Venezuela- mientras que Estados Unidos absorbe un 20% del consumo mundial. Esta vorágine de petróleo hace que, desde hace una década, la mitad del petróleo consumido en este país sea importado. Hoy, un 57% de este volumen procede de Canadá, Arabia Saudí, México y Venezuela y otro 25% de ocho países (entre ellos Nigeria, Iraq, Gran Bretaña, Noruega, Angola, Colombia y Rusia)¹.

Sin embargo, advierte Klare, dado que los yacimientos de los países europeos y norteamericanos entraron en fase de madurez (por la duración y el ritmo de su explotación), la participación de los países de la OPEP en estas importaciones crecerá a un ritmo sostenido en los próximos años. El problema se ve agudizado con la irrupción de países emergentes en la lucha por este recurso cada vez más escaso: China, India y Rusia. El acudir a la fuerza militar para garantizar la seguridad energética de Estados Unidos trae consigo consecuencias impredecibles, tanto en el plano militar (con conflictos más largos y costosos en vidas humanas de lo previsto) como

en el económico (con un incremento del presupuesto y de los gastos de defensa). Sin embargo, ésta ha sido la respuesta más frecuente de las administraciones de turno.

Tras un recuento del origen de la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudí, sellada en la mañana de la Segunda Guerra Mundial, Klare ofrece una relectura de la Guerra Fría a través de las doctrinas enunciadas sucesivamente por Truman, Eisenhower, Nixon y Carter. El autor rastrea así las variaciones en la asociación público-privado, que caracterizan la diplomacia petrolera durante seis décadas, con variantes según el grado de implicación directa de las fuerzas armadas en los conflictos del golfo Pérsico: mientras el Estado se encarga de garantizar la seguridad y estabilidad en la región, las empresas garantizan el abastecimiento a los precios más bajos posibles del mercado interno.

El objetivo de la “doctrina Carter”, expresada por el entonces presidente demócrata en su discurso del 23 de enero de 1980, era contrarrestar el integrista islámico y el terrorismo en el golfo, junto con la invasión soviética en Afganistán. Desde luego, Estados Unidos asumió directamente la responsabilidad de defender el Oriente Próximo, con el establecimiento de bases militares en Omán, Kenia y Somalia, que apoyaran las operaciones de la Fuerza Unida de Intervención Rápida (RDJTF por sus iniciales en inglés), con base en Tampa (Florida).

Tras la invasión de Kuwait por las tropas de Saddam Hussein el 2 de agosto de 1990, Estados Unidos mantuvo un importante contingente en Arabia Saudí, en un primer momento para lanzar la operación “Tormenta del Desierto”, luego la operación “Vigía del Sur”, lo cual contradecía su compromiso de retirarse inmediatamente después de la “liberación” de Kuwait. De hecho, fue tan sólo en 2003 que estas tropas fueron evacuadas, tras la multiplicación de los atentados contra infraestructuras y personal militar estadouni-

denses que antecedieron el triple atentado del 11 de septiembre de 2001. De ahí la segunda tesis del libro:

“Los móviles principales de la inquina de Bin Laden contra Estados Unidos eran el despliegue de tropas estadounidenses en Arabia Saudí y la tradicional alianza entre Washington y la familia real saudí, es decir la alianza forjada en 1945 por el presidente Roosevelt y el rey Ibn Saud” (p. 92).

Los tres capítulos siguientes son dedicados al análisis de la política energética y militar de la administración Bush hijo, y sus relaciones con la estrategia de lucha contra el terrorismo, implementada después de los atentados del 11 de septiembre. Desde marzo de ese año 2001, el sucesor de Clinton había encargado a un grupo de expertos la redacción de los lineamientos de la política nacional energética. El documento entregado por esta comisión, conocido como Informe Cheney, por el nombre del ex vicepresidente que la encabezó, anuncia la intensificación de la explotación de las reservas mundiales de petróleo, antes que una racionalización del consumo o el desarrollo de nuevas fuentes de energía.

Según el autor, la ejecución de esta “estrategia de la extracción máxima” (p. 131) implica extender la “doctrina Carter” a las zonas de diversificación, además de la región del golfo Pérsico. Entre los primeros interesados figuran por supuesto Arabia Saudí, Iraq, Irán, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, principales productores mundiales de petróleo -junto con Venezuela-. Pero el Informe Cheney menciona también la necesidad de explotar las reservas de Alaska, ubicadas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, y de diversificar las fuentes de suministro en la cuenca del mar Caspio, el África Occidental y América Latina. Ahora bien, estas regiones se caracterizan a la vez por una limitada capacidad de inversión propia y una gran

inestabilidad política y militar. De ahí surge la tercera tesis del libro:

“[...] parece ser que la administración ha fusionado sus tres prioridades principales de política exterior y seguridad (ampliar el acceso al petróleo extranjero, reforzar la capacidad de proyección militar e intensificar las operaciones antiterroristas) en un único plan estratégico...” (p. 116).

Tras una larga digresión sobre las capacidades reales de los países implicados de incrementar su producción respectiva, Klare enumera los factores de inestabilidad que afectan a Colombia, Venezuela, Azerbaiyán, Kazajistán, sin olvidar los conflictos civiles en Chechenia, Georgia, Angola y Nigeria.

El penúltimo capítulo se concentra en lo que amenaza con convertirse en el teatro de nuevos conflictos armados en los cuales se mezclen los problemas de las poblaciones locales con los intereses rivales de los viejos contrincantes de la Guerra Fría en Asia Central y el Oriente Medio, por el control de la producción y el transporte de petróleo crudo y gas natural. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia oscilan entre la colaboración en la lucha antiterrorismo y la competencia por ganar influencia política entre los territorios atravesados por oleoductos como el BTC (que une Bakú, en Azerbaiyán, a Ceyhan, en Turquía, pasando por Tbilisi, en Georgia), operacional desde el año pasado. China entró en el escenario en 2000-2001 debido a sus necesidades energéticas para sostener el crecimiento económico y su dependencia hacia el petróleo del golfo Pérsico y el mar Caspio.

A la tradicional venta de armas y asesoría militar, se suma un abanico de artefactos que permiten a estos tres países asegurarse la benevolencia de regímenes antidemocráticos o “canallas” de los cuales dependen. Entre los múltiples ejemplos que cita Klare, vale mencionar el apoyo de Rusia a Irán contra las sanciones por su programa de nuclear civil, o el

liderazgo de la China en la creación de la Shanghai Cooperation Organization (SCO), un organismo regional de seguridad integrado por Rusia, Kirguizistán, Karzajistán y Tayikistán. Pero lo más llamativo es la estrategia de inversiones posterior a la reestructuración de China National Petroleum Corporation (CNPC), con la separación de China National Petrochemical Corporation (Sinopec) y China Offshore Oil Corporation (CNOOC), en 1998. Esta transnacionalización de la industria petrolera China lleva a estas empresas a asociarse con empresas privadas o estatales de una docena de países (entre ellos, Ecuador, Perú y Venezuela), para la construcción de infraestructuras así como la exploración y explotación de yacimientos.

El libro concluye con un capítulo de recomendaciones para proponer una salida al “dilema de la dependencia”, que se puede resumir en tres pasos y llevaría a la autonomía energética de Estados Unidos. Se trata en primer lugar de separar las negociaciones comerciales para las importaciones de hidrocarburos de los compromisos de seguridad con los países exportadores, es decir, poner fin a la diplomacia petrolera imperante desde 1945. Simultáneamente, Estados Unidos debería reducir su dependencia hacia el petróleo, lo cual implica un “cambio de paradigma energético”, en particular mediante mejoras en la eficiencia energética del parque automotor. El tercer paso consiste en entrar a la era “postpetrolera”, con inversiones masivas en investigación y desarrollo de fuentes de energía alternativas. Si bien es cierto que estas recomendaciones carecen de profundidad y podrían en sí hacer el objeto de un libro, presentan muchas similitudes con el discurso de los demócratas y podrían anunciar, al fin y al cabo, una suerte de programa energético y militar para la eventual alternancia, después de las elecciones de 2008.

*Guillaume Fontaine
Flacso-Ecuador*